

Compilado por Anita Krainer y Hugo Jácome Estrella

Una oportunidad para imaginar otros mundos: el legado de Alberto Acosta Espinosa

© 2023 FLACSO Ecuador
Febrero de 2023

Cuidado de la edición: Editorial FLACSO Ecuador

ISBN: 978-9978-67-631-8 (impreso)
ISBN: 978-9978-67-632-5 (pdf)
<https://doi.org/10.46546/2022-37savia>

FLACSO Ecuador
La Pradera E7-174 y Diego de Almagro, Quito-Ecuador
Telf.: (593-2) 294 6800 Fax: (593-2) 294 6803
www.flacso.edu.ec

Fotografía de portada:
Florencia Luna

Una oportunidad para imaginar otros mundos : el legado de Alberto Acosta
Espinoso / compilado por Anita Krainer y Hugo Jácome Estrella. Quito : FLACSO
Ecuador, 2023

xiv, 286 páginas : (Serie Savia)

Incluye bibliografía

ISBN: 9789978676318 (impreso)
ISBN: 9789978676325 (pdf)
<https://doi.org/10.46546/2022-37savia>

ECONOMÍA POLÍTICA ; DESARROLLO ECONÓMICO ; DOLARIZA-
CIÓN ; SOCIOLOGÍA ECONÓMICA ; MIGRACIÓN ; ECOLOGÍA ;
EXTRACTIVISMO ; BUEN VIVIR ; SUMAK KAWSAY ; BIOGRAFÍAS ;
ECUADOR I. ACOSTA, ALBERTO, 1948- II. KRAINER, ANITA,
COMPILADORA III. JÁCOME ESTRELLA, HUGO, COMPILADOR

338.9 - CDD



En la serie Savia se publican obras de divulgación científica.

Índice de contenidos

Prólogo. La alegría de ver a Alberto	VII
<i>Arturo Escobar</i>	
Agradecimientos	XI
Lista de siglas y acrónimos.	XII
Introducción	1
<i>Anita Krainer, Hugo Jácome Estrella y Francisco Rhon Dávila</i>	

PRIMERA PARTE

Un vuelo contracorriente: rompiendo mitos sobre el desarrollo desde la economía política

Caos dentro de la economía política.	
Mitos e intuiciones desde un pensamiento contracorriente.	15
<i>John Cajas Guijarro</i>	
Dolarización: ¿economía política o política económica?	40
<i>Julio Oleas-Montalvo</i>	
El gran salto	63
<i>Fander Falconí</i>	
Transformaciones socioecológicas emancipadoras radicales: decrecimiento y estrategia	75
<i>Ulrich Brand</i>	

SEGUNDA PARTE

Migraciones, desarrollo y sus múltiples contradicciones

El legado de Alberto Acosta sobre migraciones, desarrollo desigual y acción política.	103
<i>Soledad Álvarez Velasco y María Mercedes Eguiguren</i>	
Alberto Acosta y la construcción de un sentido político para la migración en Ecuador	141
<i>Gioconda Herrera</i>	

TERCERA PARTE

Extractivismos y neoextractivismos: la paradoja de ser pobres siendo ricos

Miradas sobre los extractivismos. Un repaso de temas y prácticas en homenaje a Alberto Acosta.	161
<i>Eduardo Gudynas</i>	
Profundización extractivista minera e hidrocarburífera en los Andes y la Amazonía ecuatorianos	182
<i>Ivette Vallejo Real y Carlos Quizhpe Parra</i>	

CUARTA PARTE

Hacia el buen vivir: la naturaleza como sujeto de derechos

Alberto Acosta, el buen vivir como discurso crítico.	205
<i>David Cortez</i>	
Los derechos de la naturaleza desde Alberto Acosta.	221
<i>Esperanza Martínez</i>	
Buen vivir y sistema mundial.	237
<i>José María Tortosa</i>	
Alberto Acosta y los derechos de la naturaleza: los grandes cambios requieren esfuerzos audaces.	260
<i>María Cristina Vallejo y Santiago Vallejo</i>	
Autoras y autores	280

Dolarización: ¿economía política o política económica?

Julio Oleas-Montalvo

La moneda es un símbolo muy importante de la soberanía. Y a mí me parece que una nación, si quiere seguir siendo nación, necesita tantos símbolos de soberanía como sea posible.
—Milton Friedman

Como ocurrió en Argentina en la década de los noventa con la convertibilidad, en Ecuador la dolarización ha dejado de ser una medida de estabilización, una política económica, para convertirse, en sí misma, en el objetivo de esta. Para mantenerla, otras prioridades económicas y sociales han sido relegadas y supeditadas a la continuidad de una sucesión atropellada de cortos plazos políticos. La dolarización fue “más el resultado de decisiones y angustias políticas antes que la consecuencia de reflexiones técnicas. Fue, para decirlo descarnadamente, producto de la mediocridad de las élites gobernantes” (Acosta 2001, 240), por lo que no puede ser analizada “en el vacío de la política económica, sino que debe incorporar reflexiones propias de la economía política” (241).

En el prólogo de *Macroeconomía y economía política en dolarización*, Salvador Marconi (2001, 14) resume la trágica dimensión de ese momento de la siguiente manera:

En la coyuntura económica por la que atravesaba el país a finales de diciembre de 1999 e inicios de 2000, era necesario —y así lo propusieron instancias técnicas del Banco Central del Ecuador— fijar el tipo de cambio (y, obviamente, adoptar rigurosos mecanismos de control en el mercado de divisas), eliminando la especulación ejercida principalmente desde la banca quebrada y anclando definitivamente las expectativas de los agentes económicos. En esa perspectiva, y sin una supervisión

bancaria adecuada y oportuna, la dolarización aparece simplemente como la cortina de humo para la gestión inmoral del dinero de los depositantes.

Esa cortina de humo nubló la visión de más de un aplomado analista. El politólogo Fernando Bustamante (2000, 44) afirmó que las

élites sociales ecuatorianas se han precipitado por el camino de la dolarización, sin haber –aparentemente– medido con un mínimo de previsión las implicancias que ella representa para ellas mismas, y para su modo habitual de existencia. La reproducción de buena parte del sector empresarial se ha basado en una compleja maraña de subsidios, protecciones arancelarias, prebendas y rentas políticamente generadas.

A partir de este diagnóstico predijo que “la dolarización va a castigar duramente la estructura prebendaria y rentista en la que se asienta la economía política ecuatoriana, y, por otro lado, hará mucho más difícil el uso de mecanismos redistributivos clientelares y populistas” (Bustamante 2000, 45). En consecuencia, “la dolarización casi parece, para ellos, una especie de suicidio de clase, en aras de imponer y someterse a una racionalidad sistémica férrea, impersonal y brutalmente selectiva” (46).

El sociólogo Julio Echeverría (2001, 21) consideró que la dolarización “presenta retos cuyo enfrentamiento puede significar un viraje radical en las modalidades del desarrollo económico vigentes hasta ahora”. Anticipó que operaría una

no irrelevante transformación de la cultura empresarial, en especial, en su composición rentista y parasitaria respecto del Estado. [Y que] incrementar la productividad y mejorar la competitividad deberá suponer [...] fomentar el desarrollo humano, o sea, modificar la actual dependencia de las llamadas “ventajas comparativas”, que se reducían a la sobreexplotación de los recursos naturales y de la mano de obra (21-22).

Con menos optimismo, Marconi también sugiere que ese *grand affaire*, como llamó a la dolarización –o “receta hobbesiana que refleja la característica profundamente antidemocrática de las élites de

poder en Ecuador”– sea analizado en “el contexto de la economía política” (2001, 11-12). Es en ese contexto en que se desenvuelve Alberto Acosta Espinosa para estudiar la dolarización ecuatoriana.

En este artículo se destacan varios aspectos de ese estudio, para lo cual, a continuación, se precisa el referente teórico empleado y sus potencialidades. En la siguiente sección se resume el proceso histórico-económico que antecedió a enero de 2000. Luego se expone la estrategia empleada por las élites para consumir la dolarización y enseguida se presenta una síntesis del análisis *ex post* realizado dos décadas más tarde. En la parte final se consignan algunas preocupaciones de tipo prospectivo.

No se pretende realizar una exégesis del trabajo de Acosta, sino tan solo destacar los temas anotados, por considerarlos relevantes, con base en siete publicaciones escogidas de entre su extensa producción sobre esta receta hobbesiana.

¿Política económica o economía política?

Los economistas neoclásicos aceptan que la dolarización ecuatoriana fue una medida de política económica inevitable, imprescindible para detener la hiperinflación y corregir las distorsiones provocadas por el exceso de oferta monetaria. Asumen que el mercado es una institución fundamental de la sociedad, y que la oferta de bienes y servicios se relaciona con su demanda mediante el mecanismo de precios, para encontrar un equilibrio que, se supone, es instantáneo. Esta reformulación del mito de la mano invisible promueve la evitabilidad del Estado y sugiere que la dinámica del mercado no produce ganadores y perdedores: todos los “agentes económicos” pueden maximizar las funciones de utilidad o de producción que se hayan propuesto. Según esta narrativa, no es necesario auscultar las motivaciones sociales de la política económica, así como no es pertinente investigar si su aplicación beneficia o perjudica a grupos específicos.

La economía política tiene una perspectiva diferente. Esta propone que todo lo económico es inevitablemente político, confronta en forma directa la espuria carencia valorativa supuesta por la economía neoclásica y su representación poco realista del capitalismo como un

sistema en equilibrio.¹ La economía política es una ciencia social que estudia problemas económicos, pero comprometida con una amplia variedad de influencias interdisciplinarias y preocupaciones del mundo real (Stilwell 2019, 47-48).

Al asumir que la armonía social se basa en el mercado, la política económica no estudia los fundamentos sociales ni las relaciones de poder subyacentes. La economía política sí considera estos factores y pone énfasis en las fuerzas sociales como fuente de los conflictos que alteran la cooperación, alimentan las inequidades sociales y provocan las crisis económicas. La economía política “reconoce que los cambios sociales resultantes de las adaptaciones a las contradicciones sistémicas generalmente tienen características cualitativas tanto como cuantitativas” (Stilwell 2019, 52).

Stilwell (2019) postula que el núcleo de la economía política contemporánea está constituido por la economía marxista, el poskeynesianismo y el institucionalismo.² El carácter materialista e histórico del marxismo enfatiza la construcción y choque de los intereses económicos y de las fuerzas que impulsan los cambios sociales y políticos. Contradicciones profundas, como la existente entre la producción y la materialización de excedentes, son determinantes.

Acosta pertenece a este paradigma. Así, por ejemplo, puntualiza que el tipo de cambio de 25 000 sucres por dólar, al que se dolarizó la economía ecuatoriana, fue demasiado alto, pues “el valor de mercado bordeaba los 18 000 sucres, a lo sumo” (Acosta y Schuldt 2000, 27). Esta decisión, más la masiva emisión monetaria de 1999, de efecto rezagado por el feriado bancario y el congelamiento de depósitos de marzo de 1999 (Oleas-Montalvo 2020), alimentaron la inflación, a pesar del quiebre en las expectativas cambiarias, y evidenciaron la estrecha relación entre las autoridades económicas y los grupos de poder tradicionales.

¹ Es necesario advertir lo erróneo del uso del término *economía política* para englobar las teorías de la elección pública (*public choice*), que aplican las herramientas de la economía neoclásica al análisis de las políticas públicas (Stilwell 2019, 47).

² Pero dado su talante interdisciplinario, se encuentra abierta a otras disciplinas, en especial al feminismo, a la ecología, a la sociología, a la historia, a la política, a la geografía y a la economía evolutiva, entre otras (Stilwell 2019, 49).

En la lista de ganadores asoman muy bien posicionados los importadores (a la cabeza, los contrabandistas), luego de superado el alza del dólar a 25 000 sucres: sobrevaluación que favorece en el corto plazo a los exportadores [...]. Otros beneficiarios serían el negocio inmobiliario y la construcción para vivienda de clase media; el gran comercio con posibilidades de crear sistemas de financiamiento [...]; parte de la industria mayor que ya incursiona en mercados externos (¿sector automotor?); las bolsas de valores [...]; y las empresas de servicios, particularmente las de teléfonos y electricidad. Un gran ganador de este experimento ecuatoriano son los propios Estados Unidos, los cuales con la claudicación de las élites nacionales ampliaron su territorio monetario y comercial sin haber asumido compromiso alguno (Acosta 2000, 24).

Preguntar *cui bono* –o *cui prodest* (en latín, “¿quién se beneficia?”)– puede guiar una investigación pendiente, en la actualidad indiscutiblemente histórica, habiendo transcurrido dos décadas, enfocada ya no en los flujos macroeconómicos de la coyuntura, sino en los *stocks* de activos y pasivos de los clientes del sistema financiero y su denominación. Los intereses económicos de deudores y acreedores del sistema financiero –ecuatoriano y extranjero– fueron determinantes. La dolarización pulverizó salarios y deudas denominadas en sucres, por un lado; y, por otro, eliminó el riesgo cambiario de deudores que habían contratado créditos denominados en moneda extranjera. Estos fenómenos –la gestión de los portafolios de inversión de los agentes económicos, diría un economista ortodoxo– todavía no han sido suficientemente explorados, pero serán determinantes para explicar con mayor claridad las motivaciones del “salto al vacío” –como en su momento fue calificada la decisión del presidente Mahuad–.

Desde la visión de la economía política internacional, los estudios sobre la dolarización se robustecerían al incorporar los aspectos geopolíticos que la rodearon, pues estaba en juego

el afán de los Estados Unidos por ampliar su influencia en su “patio trasero”, por cierto, sin asumir las responsabilidades que se derivarían de una unidad monetaria simétrica. La dolarización unilateral asoma, entonces, como parte de una estrategia no explicitada por Washington,

que se engarza con la creciente militarización de su política de relaciones exteriores (Acosta 2002a, 57).³

Con la implosión del socialismo real, Estados Unidos cambió la justificación para tener sus bases y cuasibases militares en América Latina. El comunismo –enemigo del “mundo libre” durante la Guerra Fría– fue reemplazado por la “guerra contra las drogas y el terrorismo” (Enciso 2019, 625). Este cambio de política lo evidenció el Plan Colombia, concebido en 1999. Un año antes, el presidente Mahuad había cedido a Estados Unidos el control de las instalaciones militares de la Fuerza Aérea de la Base Eloy Alfaro, en Manta, para combatir el tráfico de estupefacientes y la migración clandestina.

En los años del cambio de siglo, Estados Unidos intensificó su influencia en América Latina. La dolarización tuvo como telón de fondo el confiado avance de la Iniciativa de las Américas, la estrategia norteamericana basada en factores económicos (comercio, inversiones y deuda), que debía formalizarse como Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), para fortalecer su presencia hegemónica en la región. La iniciativa naufragó en Mar del Plata, en noviembre de 2005, cuando “los vientos soplaron en sentido contrario a la dirección esperada por los promotores del ALCA” (Cueva 2006, 82). Esto marcó un punto de inflexión, factible por la presencia de gobiernos progresistas en América Latina, el inicio del superciclo de los *commodities* y la creciente presencia de la República China –la retadora de la hegemonía norteamericana–.

El tortuoso ajuste neoliberal

“Con la dolarización plena de su economía, el 9 de enero de 2000, Ecuador se transformó en el primer país de América Latina que sacrificó oficialmente su moneda nacional e impuso una moneda extranjera

³ Acosta enfatiza, en varias publicaciones, que la dolarización del Ecuador no puede equipararse a la zona monetaria creada en Europa como consecuencia del proceso de integración productiva, fiscal, financiera, laboral y monetaria de la Comunidad Europea, iniciada en 1951 con el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) o Tratado de París.

como de curso legal completo”, escribió Acosta (2002a, 57). Luego de dos décadas, es evidente que Ecuador no solo fue el primero, sino también el único –aparte de las llamativas decisiones de política monetaria tomadas en El Salvador–.

La dolarización se define en el glosario de términos básicos de la *Breve historia económica del Ecuador*⁴ como la situación

en la que el dólar (estadounidense) desplaza a la moneda nacional en cualquiera de sus funciones; puede ser espontánea o implícita (cuando es acatada por los habitantes sin una decisión gubernamental) y oficial (cuando es decretada por el gobierno). En Ecuador, la dolarización espontánea empieza con la sustitución del sucre por el dólar en las funciones de acumulación (ahorro) y unidad de cuenta; se hace oficial cuando el dólar reemplaza al sucre en su función de medio de cambio (institucionalmente se decreta en enero del año 2000) (Acosta 2001, 287).

Alberto Acosta ha sido el economista que más ha estudiado la dolarización, fenómeno económico que bien puede ser calificado como raro, incluso en la región latinoamericana. Por sus estudios sobre la historia económica ecuatoriana, él sabe que el país atravesó por largos períodos de estabilidad –con altas tasas de crecimiento económico–, ejerciendo política monetaria y cambiaria en el marco de los compromisos internacionales definidos en Bretton Woods.

Su explicación “técnica” para asumir la dolarización se basa en el trilema que enfrentan las economías pequeñas y abiertas; solo pueden estar juntas dos de tres opciones (Luque 2000, 130):

- libre movilidad de capitales más tipo de cambio fijo sin política monetaria, como el régimen del patrón oro británico del siglo XIX;
- tipo de cambio fijo más política monetaria sin movilidad de capitales, como el sistema de Bretton Woods hasta 1971; y,
- movilidad de capitales más política monetaria y tipos de cambio fluctuantes, como ocurrió en el mundo luego de 1971 y en Ecuador entre 1983 y 1999.

⁴ Esta obra cuenta con una novena reimpresión.

El ejercicio de la política monetaria no siempre fue inflacionista. Pero, ¿qué pasó –y desde cuándo– para que esa política se descarrilara? El ajuste económico comenzó en mayo de 1982, con una devaluación de 32 % que puso fin a un largo período de tipo de cambio fijo (Oleas-Montalvo 2018, 128) e inició una etapa de activa política cambiaria finalizada en enero de 2000. La década de 1980 fue una agitada época de bajo crecimiento y alta inflación, en la que el Plan de Estabilización Económica socialcristiano y el gradualismo socialdemócrata resultaron tan estériles para contener la inflación como ya lo había sido el Plan Macroeconómico de Estabilización en la última década del siglo XX (septiembre de 1992).

Sin embargo, este trilema macroeconómico limita la discusión a su nivel técnico: la dolarización sería encasillable en la primera solución. Para explicarla desde la economía política, Acosta otorga igual atención al descontrol monetario que a la deuda externa.⁵ La crisis de la deuda externa fue aprovechada por los organismos multilaterales de crédito (en especial por el FMI y el Banco Mundial) para canalizar la política económica de los países deudores hacia los preceptos del Consenso de Washington (CW). En el caso ecuatoriano también sirvió para consolidar la dolarización, a pesar de la contradicción que esto implica.⁶

⁵ En realidad, sus preocupaciones son más amplias: “Ecuador se precipitó en una de las peores crisis de su historia, plagado de una serie de problemas internacionales –la caída de los precios del petróleo y la misma crisis asiática–, problemas naturales –el fenómeno de El Niño–, problemas políticos –la inestabilidad y la resistencia social–, problemas económicos –el propio ajuste neoliberal–, y hasta problemas morales –el salvataje bancario–” (Acosta 2002a, 37). Acosta ha tratado todos estos aspectos de la crisis de fin del siglo XX, que no se abordarán en estas notas.

⁶ En su versión original, el CW proponía un tipo de cambio competitivo, que suponía el pleno ejercicio de la política cambiaria, es decir, lo opuesto a adoptar la dolarización. Pero en 2004, el padre del CW, el británico John Williamson, aceptó que había sido “ilusamente indulgente al afirmar que había consenso a favor de asegurar que el tipo de cambio debía ser competitivo, lo que se aproxima a un régimen intermedio [es decir, un tipo de cambio ni apreciado ni depreciado]; de hecho, Washington ya había comenzado a acercarse lentamente hacia la doctrina de dos esquinas que propone que un país debiera fijar firmemente el tipo de cambio o dejarlo flotar limpiamente”. En todo caso, en una nota al pie de página, Williamson acotó que estaba convencido de que “los tipos de cambio sobrevaluados son peores que los subvaluados, pero que un tipo que no es ni sobre ni subvaluado es todavía mejor” (Williamson 2004, 3).

En 1994, Ecuador renegoció su deuda externa en el marco del Plan Brady. Cambió la deuda “vieja” por bonos garantizados con títulos del Tesoro estadounidense. Para renegociar el capital, acordó emitir dos tipos de bonos (de descuento y a la par). La carta de intención del 31 de marzo de 1994 detallaba –como era usual– los logros alcanzados con el ajuste de septiembre de 1992. Para viabilizar esta negociación, el gobierno desembolsó 1984 millones de dólares (52 % de las exportaciones de ese año). Entre 1994 y 1997, la deuda externa privada creció 41,7 % en promedio cada año y la pública decreció 0,8 %. El servicio total siguió subiendo hasta representar el 166 % de las exportaciones en 1998 (4,6 veces más de lo que supuso el equipo negociador del gobierno del presidente Durán Ballén) y, ya en plena crisis bancaria, en 1999, el presidente Mahuad decidió suspender los pagos (Oleas-Montalvo 2018, 278).

Los bonos Brady, que tenían un horizonte de servicio de 30 años, fueron renegociados apresuradamente. “Dolarización, deuda y ajuste estructural, una trilogía que merece un análisis conjunto”, propone Acosta (2002b, 47). El 4 de abril de 2000, el equipo negociador del presidente Noboa remitió una nueva carta de intención para canjear la deuda Brady por bonos Global. De forma sorprendente, el 20 de abril el directorio del FMI aprobó un préstamo contingente por 304 millones de dólares.⁷ Acosta critica con dureza esta “atolondrada” renegociación.

Se debían emitir bonos Global A (a 30 años) “aproximadamente” por 2700 millones de dólares y bonos Global B (a 12 años) por 1250 millones de dólares; [...] un valor total de 3950 [...], lo cual, comparado con los 6946 millones de dólares que representaban los bonos Brady y los Eurobonos, significaba una rebaja de un 43 %. [...] Pero si se aceptan las cifras oficiales [...], así como el hecho de que el Ecuador ya entregó los colaterales para pagar el capital que correspondía a la negociación de los bonos Brady (unos 750 millones de dólares), nos encontramos con que el descuento no sería del 43 %, sino inferior al 30 %. [Más

⁷ Considérese además que el FMI había abandonado el país luego del feriado bancario (marzo de 1999) y que esa entidad no aprobó en primera instancia la decisión tomada por el presidente Mahuad el 9 de enero de 2000. Sin embargo, los primeros pasos de la dolarización estuvieron monitoreados por sendas misiones del FMI, en junio y octubre de 2000, y en febrero de 2001 (Acosta 2002a, 47).

todavía, los mismos] acreedores –tal como se conocía públicamente a través de varias notas de prensa– esperaban que al menos se solicitara un 50 % de rebaja real; descuento que tampoco habría estado acorde con las valoraciones de mercado, si se considera que los papeles de la deuda externa ecuatoriana tenían una cotización inferior al 70 y aun al 80 % de su valor nominal. [Esto le lleva a concluir que] a la postre el servicio total de los Global sería superior en 3000 millones de dólares al de los Brady, lo que representa, en la práctica, un nuevo endeudamiento (Acosta 2002b, 41-43).

En el Club de París, los resultados obtenidos en septiembre de 2000 no fueron mejores, pues no se logró ninguna reducción de deuda. El mismo negociador ecuatoriano reconoció que lo conseguido fue “profundamente convencional” (Acosta 2002b, 45). Por último, los 250 millones de dólares de deuda que pudieron ser canjeados por inversiones sociales habrían sido un “caballo de Troya” del ajuste neoliberal (47).⁸

En consecuencia, la renegociación posterior a la dolarización no tuvo como objetivo solucionar el problema de la deuda externa.

El objetivo final asoma con claridad: el gobierno busca mejorar la imagen del país en el mercado financiero mundial, pues la posibilidad de acceder a créditos internacionales con mayor agilidad que antes es uno de los requisitos para que funcione una economía dolarizada (Acosta 2002b, 44).

Acosta diferencia claramente entre estabilidad de precios y estabilidad económica,⁹ para concluir que, tras 20 años de sucesivas crisis económicas, uno de los problemas más críticos del país era la creciente pérdida de soberanía en términos de política económica, intensificada por el ajuste neoliberal inspirado en el CW, lo que habría alcanzado su “máxima expresión” con la dolarización oficial. Y, con perspicacia, anticipó que no sería “una sorpresa” que, gracias a la recuperada “credibilidad” internacional, el Ecuador dolarizado entrara en un nuevo proceso de

⁸ Varios autores han calificado de “tortuoso” el camino del ajuste neoliberal ecuatoriano; los primeros fueron Thoumi y Grindle (1992). De ahí el subtítulo de esta sección.

⁹ Diferenciación que no tiene sentido en la visión del equilibrio general de la economía de la corriente principal.

acelerado endeudamiento (Acosta 2002b, 50). Lo que de hecho ocurrió en la segunda década del siglo XXI, una vez agotado el superciclo de los *commodities*.

El terrorismo económico

“La dolarización o la convertibilidad, su prima hermana, son apenas herramientas de política económica en el campo cambiario” (Acosta 2000, 10). Sin embargo, la “sociedad está hipnotizada por el impacto político, económico y hasta cultural provocado por el anuncio de la dolarización. Mientras que a su sombra [...] avanza la posibilidad de completar las reformas estructurales, en especial las privatizaciones y la flexibilización laboral” (11).

Junto con Jürgen Schuldt, Acosta sostiene que la “‘aceptación sumisa y acrítica’ de la dolarización se logró invocando el ‘fantasma de la hiperinflación’, como parte de una estrategia política que denominaron ‘terrorismo económico’” (Acosta y Schuldt 2000, 25). El terrorismo económico es

la acción de cualquier persona o institución política o publicación, gobernante u organismo que difunde noticias u opiniones infundadas o carentes de constatación empírica que pueden llevar a la población a actitudes que hagan realidad el rumor que han corrido o que alienten la aceptación de posiciones sumisas frente a situaciones supuestamente inevitables (Acosta y Schuldt 2000, 25).

En la compleja coyuntura del cambio de siglo, en medio de una grave crisis financiera no resuelta, los interesados en la dolarización difundían la noticia infundada de que Ecuador se encontraba “con un pie en la hiperinflación”.

Al analizar la información oficial de esos meses, Acosta y Schuldt (2000, 27) constatan que, en esa coyuntura, Ecuador atravesaba una “hiperrecesión”, por lo que, si se buscaba “la declinación de la inflación, con la dolarización lo que se [hizo] es intentar parar una hemorragia en la pierna, con un torniquete en el cuello”. Donde sí hubo hiperinflaciones,

más de 15 años antes, es decir, durante la década perdida latinoamericana –la de los ajustes recesivos orquestados por el FMI para sortear la crisis de la deuda externa sin afectar los intereses de los acreedores–, fue en Bolivia, Nicaragua, Argentina, Perú y Brasil. Entre todas estas experiencias, solo Argentina recurrió a un tipo de cambio rígido (la convertibilidad) para contrarrestar la explosión de precios. Pero en este caso, citando a Calcagno y Calcagno, “lo que debió haber sido una herramienta monetaria de emergencia comenzó a adquirir permanencia, al punto de convertirse en eje del modelo neoliberal” (Acosta y Schuldt 2000, 28).

En Bolivia, la inflación llegó a una tasa mensual anualizada de 8171 % en 1985; en Nicaragua, a 14 295 % en 1988; en Argentina, a 4924 % en 1989; en Perú, a 7658 % en 1990; y en Brasil, a 2709 % en 1993. “Frente a estas tasas, la inflación del 60 % en Ecuador, registrada en el año 1999, no alcanza siquiera el rango de inflación alta, para lo cual debió ser superior al 100 %, y esto por algunos meses” (Acosta y Schuldt 2000, 28). Es más, al finalizar la década de 1990, había un consenso entre los organismos multilaterales sobre las inflaciones elevadas como un fenómeno del pasado.

En su argumentación, Acosta y Schuldt (2000) no solo recogieron evidencia empírica. Recordaron que Phillip Cagan (1956) propuso, en *The Monetary Dynamics of Hyperinflation*, que el inicio de un proceso hiperinflacionario se puede situar “en el mes en el que los aumentos de precios exceden el 50 %” (Cagan 1956, citado por Acosta y Schuldt 2000, 30), lo que equivale a una inflación anual de casi 13 000 %. También tomaron en cuenta que Rudigier Dornbusch y Stanley Fischer (1987), en *Macroeconomics*, consideraban que una hiperinflación es tal si los precios presentan variaciones anuales superiores a 1000 %, “es decir, corresponden al equivalente de una tasa mensual de 22,1 %” (Acosta y Schuldt 2000, 30), cifra que jamás se alcanzó en el caso ecuatoriano.

El incremento de precios ocurrido durante la crisis financiera tampoco tenía los rasgos cualitativos característicos de las hiperinflaciones (Acosta y Schuldt 2000, 31-34).

- Si bien a lo largo de la década final del siglo XX se registró una creciente sustitución monetaria, acelerada por dos factores (desde 1994, por la

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y desde 1998, por la expansión de la emisión monetaria requerida para el salvamento de las entidades financieras en quiebra), esta condición es necesaria pero no suficiente, como lo probaba la experiencia peruana.

- La formación de precios de la economía ecuatoriana (incluso tarifas, rentas, alquileres, intereses, servicios) recién comenzó a dolarizarse en forma masiva con el anuncio del 9 de enero de 2000.

- No se produjo una indexación generalizada de las remuneraciones.

- El impuesto inflación siguió siendo una fuente de financiamiento presupuestario.

- No se produjo una “dislocación” del aparato productivo, algo que evidentemente sí ocurrió con más de la mitad del sistema financiero, en especial, el domiciliado en Guayaquil.

Por último, tampoco se habían presentado las precondiciones de una hiperinflación, salvo la “situación generalizada de ingobernabilidad que se vivió en el gobierno de Jamil Mahuad, caracterizado por la ineptitud, el engaño y hasta la corrupción” (Acosta y Schuldt 2000, 34-36).

- No se había producido una indexación plena. Si bien el salario mínimo vital cayó en términos reales de 160 dólares en agosto de 1998 a 54 dólares en enero de 2000, en términos nominales experimentó alzas modestas.

- No se produjeron intentos fallidos de estabilización que justificaran una decisión extrema como la mutilación de la política monetaria. El último ajuste macroeconómico se efectuó en 1992 (el *overshooting* cambiario del inicio del gobierno del presidente Durán Ballén). Para tratar de controlar la inflación, entre 1994 y febrero de 1999, el Banco Central empleó un sistema de bandas cambiarias que se tornó inviable cuando desquició su política de emisión con el fin de financiar los préstamos concedidos a los bancos quebrados.

- El ataque especulativo que sufrió la reserva internacional del Banco Central no alcanzó a colapsar el régimen cambiario. Al momento de la dolarización, los 1200 millones de esa reserva le daban capacidad suficiente para seguir maniobrando en el mercado cambiario.

- El conflicto distributivo no había alcanzado la dimensión de un colapso social. No obstante, no se puede desconocer el gigantesco perjuicio

causado a los depositantes del sistema financiero, con base en el acuerdo colusorio entre algunos banqueros, los partidos políticos que hacían mayoría en el Congreso y las autoridades económicas del gobierno del presidente Mahuad.

- Si bien en mayo de 1999 el FMI abandonó el país tras el fracasado intento de reformar la ley de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), cerrando las fuentes de financiamiento externo, la cuenta corriente de la balanza de pagos del año final del siglo XX arrojó un saldo positivo de 955 millones de dólares, lo que no configuraba –todavía– una situación de estrangulamiento externo.

Los empresarios, académicos, políticos, “expertos internacionales” y periodistas que orquestaron esta estrategia terrorista no solo engañaron al país al afirmar que estaba a las puertas de la hiperinflación, también aseveraron que, para evitar ese evento, la *única* alternativa de política económica posible era la dolarización. Ni siquiera consideraron la convertibilidad “a la Argentina” que, por entonces, todavía no había desembocado en el “corralito” decretado por el presidente De la Rúa el 3 de diciembre de 2001.¹⁰

El terrorismo económico que impulsó la adopción del dólar como moneda de curso legal evoca la teoría de la profecía autocumplida del sociólogo Robert Merton, cuya premisa es el teorema de W. I. Thomas: “si los individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias”. Las personas responden al sentido que tienen de una situación y no a los “rasgos objetivos”, por lo que las conductas estarán determinadas por el sentido que se le dé a esa situación (Vargas 2016, 65). Merton afirma que

las definiciones públicas de una situación (profecías o predicciones) llegan a ser parte integrante de la situación y, en consecuencia, afectan a los acontecimientos posteriores. Esto es peculiar a los negocios humanos. Las predicciones del regreso del cometa Halley no influyen en su

¹⁰ Domingo Cavallo, adalid de la convertibilidad argentina con el presidente Menem, artífice del “corralito” con De la Rúa y director de la Fundación Mediterránea, también preparó el Plan de Convertibilidad presentado al Ecuador por el presidente Bucaram el 1 de diciembre de 1996 (Oleas-Montalvo 2018).

órbita. Pero el rumor de insolvencia del banco de Millingville afectó al resultado real. La profecía de la quiebra llevó a su cumplimiento (Vargas 2016, 65).¹¹

El análisis de Acosta y Schuldt se anticipó varios años a la hoy ya famosa doctrina del *shock* de Naomi Klein, la principal herramienta del “capitalismo del desastre”. Esta doctrina promueve “ataques organizados contra las instituciones y bienes públicos, siempre después de acontecimientos de carácter catastrófico, declarándolas al mismo tiempo atractivas oportunidades de mercado” (Klein 2008, 6). Para Klein, el ideólogo de esta escuela es Milton Friedman, quien junto con sus

poderosos seguidores habían perfeccionado [...] la estrategia: esperar a que se produjera una crisis de primer orden o estado de *shock* y luego vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados, mientras los ciudadanos aún se recuperaban del trauma, para rápidamente lograr que las “reformas” fueran permanentes. [Cita a Friedman para precisar que] solo una crisis –real o percibida– da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que esa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable (Klein 2008, 7).

Friedman aprendió la importancia de aprovechar el estado de *shock* cuando asesoró al dictador chileno Augusto Pinochet para ejecutar “la transformación capitalista más extrema que jamás se había llevado a cabo en ningún lugar” (Klein 2008, 8). Otras “oportunidades” similares se propiciaron 30 años más tarde: en Irak, luego de la invasión militar norteamericana; en Sri Lanka en 2004, tras el tsunami, y en Luisiana en 2005, luego del huracán Katrina. Klein postula que, cuando no hay desastres, las reformas hacia la economía de mercado se han logrado provocando el estado de *shock*. Como en Argentina en la década de

¹¹ Para corroborar su teoría, Merton recuerda lo ocurrido en 1932 al Last National Bank, próspera entidad que fue víctima de una profecía autocumplida. Por un rumor de insolvencia, sus depositantes se precipitaron a exigir sus depósitos, lo que en efecto causó la insolvencia predicha (Vargas 2016, 65).

1970, con las sistemáticas desapariciones de más de 30 000 personas en la Junta Militar, antes de imponer reformas inspiradas en la Escuela de Chicago. O en 1989, en China, donde la masacre de Tiananmen catalizó las reformas procapitalistas del Partido Comunista. O en 1993, en Rusia, donde Boris Yeltsin sitió el Parlamento para evitar que la oposición impidiera las masivas privatizaciones que beneficiaron a una nueva clase oligarca. La apoteosis provocada por el triunfo en Las Malvinas, en 1982, permitió a Margaret Thatcher aplastar al movimiento minero e iniciar la primera gran ola privatizadora en una democracia occidental. Y en 1999, el fulminante ataque de la OTAN a Belgrado antecedió a los sumarios procesos de privatización de la antigua Yugoslavia. Los ajustes estructurales de la década de 1980 también se pueden entender como tratamientos de choque. En todo caso, aunque en diferentes versiones e intensidades, la estrategia de Friedman tiene por objetivos dismantelar los “restos del Estado de Bienestar y promover a nivel global el modelo de desarrollo neoliberal” (Lange 2010, 225).

Esta táctica “puede imponerse parcialmente en democracia, pero para llevar a cabo su verdadera visión necesita condiciones políticas autoritarias”, afirma Klein (2008, 14). La decisión de dolarizar, tomada por el presidente Mahuad el 9 de enero de 2000, se sitúa a mitad de camino entre estos dos puntos extremos: al asumir “oficialmente” el dólar como moneda nacional mediante decreto ejecutivo, violó en forma flagrante la Constitución de 1998. Esta “herramienta de uso múltiple”, como la denominaron Acosta y Schuldt (2000), cumplió varios objetivos. En primer lugar, sirvió –aunque solo brevemente– como salvavidas político para su perpetrador. También generó una “hipnosis colectiva” que produjo expectativas positivas, para asegurar su implementación y facilitar las reformas pendientes. Debía ser la “palanca para destrabar los procesos de privatización del petróleo, la electricidad, los teléfonos y la seguridad social, así como para apurar la flexibilización laboral”. En tercer lugar, debía ser “la camisa de fuerza para asegurar el equilibrio fiscal” y de esta manera lograr la elusiva estabilidad de precios. Por último, y en sintonía con las ideas que más adelante desarrollaría Klein, contribuiría a construir “el ancla necesaria para enraizar el modelo neoliberal, cuya continuidad estaría en cierta medida garantizada independientemente de quien gobierne el país” (Acosta y Schuldt 2000, 37).

¿Veinte años no es nada?

En mayo de 2020, Alberto Acosta y John Cajas revisitaron el proceso de dolarización en Ecuador. Concluyen, en un remozado ejercicio de economía política, que “un origen histórico trágico y múltiples narrativas cuestionables llevan al país a aceptar una rígida estructura monetaria que llena su economía de incertidumbre” (Acosta y Cajas Guijarro 2020, 15). Para llegar a esta afirmación, confrontan de modo dialéctico a los argumentos a favor de la dolarización –los llaman “narrativas”– con evidencia empírica, y así identificar los mitos y las dudas que persisten en torno a ella.

Las ideas analizadas fueron extraídas del argumento remitido por el Foro Económico (grupo de presión guayaquileño a favor de la dolarización) y publicado en el diario *El Universo* el 8 de enero de 2000, un día antes del decreto ejecutivo de dolarización. “No había alternativas; se debía parar las devaluaciones del sucre; detener la inflación; responder a la ‘dolarización espontánea’; ganar estabilidad monetaria; reducir las tasas de interés; reactivar la producción; atraer inversión extranjera” (Acosta y Cajas Guijarro 2020, 19). De ello concluyen lo siguiente:

- Es mentira que no había alternativas a la dolarización [...] el gobierno de Mahuad prefirió dolarizar en vez de sanear seriamente el sector financiero y evitar el salvataje [...], se pudo hasta *nacionalizar* el sistema financiero. [...] es plausible plantear la hipótesis de que el sector financiero tiene un *poder político* que le permite usar al Estado para *socializar sus pérdidas privadas y hasta lucrar de medidas como los salvatajes* [...], la cuestión de fondo está en enfrentar el poder del sistema financiero y subordinarlo a las demandas del aparato productivo y de la sociedad, no al revés.

- [La falta de una política cambiaria propia es un problema]. La incapacidad de devaluar podría implicar una pérdida de flexibilidad económica y un aumento de la volatilidad de la economía ecuatoriana ante *shocks* externos.

- Ecuador nunca vivió una hiperinflación; [...] ningún país latinoamericano que realmente vivió hiperinflación se dolarizó.

- En Latinoamérica, los únicos países dolarizados son Ecuador, El Salvador y Panamá, los cuales apenas representaron 2,8 % del PIB de la

región en 2018, según la CEPAL. [En consecuencia, se preguntan:] si la dolarización garantiza la estabilidad al restringir la política monetaria, ¿por qué muy pocos países se han dolarizado?

- [El grado de espontaneidad de la dolarización previa a la medida formal fue menor que en otros países. En el caso boliviano], en 1999, el 94 % de los depósitos y el 96,1 % de los créditos estaban expresados en dólares, proporciones mucho más amplias que en Ecuador y que fueron afrontadas no con dolarización, sino con una “bolivianización”.

- La dolarización no se sostuvo por fortalezas intrínsecas. Más bien, Ecuador ha logrado sostenerla con un “respirador artificial”, alimentado por flujos de dólares del exterior recibidos por exportaciones (sobre todo petroleras), remesas de migrantes, endeudamiento externo y otros flujos (Acosta y Cajas Guijarro 2020, 19-23).

A diferencia de la convertibilidad argentina, que en la década de 1990 sufrió la apreciación del dólar y la caída de los precios de los productos primarios, la dolarización se benefició con la depreciación del dólar, precios del petróleo en ascenso y un importante flujo de remesas de migrantes.

En un estudio presentado a la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en 2005, Acosta estima que, entre 2000 y 2005, habrían salido del Ecuador más de un millón de ecuatorianos, y que entre 2000 y 2004 ellos remitieron al país más de 7300 millones de dólares. En esos años, las remesas sobrepasaban a las exportaciones de banano (el segundo producto de exportación del país) e incluso eran mayores que las exportaciones de petróleo netas del servicio de la deuda. “En síntesis, las remesas son fundamentales para sostener la economía ecuatoriana, particularmente para financiar la dolarización” (Acosta 2005, 26).

En la década del consenso de los *commodities*, el crecimiento de la economía ecuatoriana no fue mejor que el de otros países latinoamericanos.

Según datos del Banco Mundial, entre 2000 y 2014, la tasa de crecimiento anual del ingreso por habitante en Ecuador registró un promedio de 2,6 %, nada excepcional si se compara con otros países

latinoamericanos: Argentina 1,65 %; Bolivia 2,45 %; Brasil 2,28 %; Chile 3,24 %; Colombia 3 %; Paraguay 1,85 %; Perú 4,3 %; Uruguay 2,89 %; Venezuela 1,43 % (Acosta y Cajas Guijarro 2020, 24).

Sobre esta base, cuestionan los efectos de la dolarización sobre la pobreza, pues la reducción de este indicador en los años 2000 podría ser “un ‘efecto rebote’ que, como pasó en otros países, ‘posiblemente se pudo lograr sin dolarizar’” (Acosta y Cajas Guijarro 2020, 24).¹² Además,

al parecer no contribuyó a mejorar las condiciones de empleo: en el año 2000, el 68 % de la población económicamente activa (PEA) se encontraba entre el subempleo (60,82 %) y el desempleo (7,34 %). [...] para 2006 la proporción llegó a 71 % de la PEA —con 64,88 % en el subempleo y 6,29 % en el desempleo— (Acosta y Cajas Guijarro 2020, 24).

A manera de conclusión

La dolarización es el objetivo central de la política económica ecuatoriana. Es más importante que el crecimiento, el control de la inflación, el déficit comercial o el equilibrio fiscal; y mucho más importante que todas las políticas sociales juntas. Al ser el eje de la política pública, el miedo a no poder mantenerla resulta paralizante.

Ese miedo monetario encierra una paradoja: es justo la falta de crítica y discusión la que puede provocar que la dolarización colapse junto con toda la economía ecuatoriana, peor aún en un contexto de crisis generalizada como la que arrancó en 2020 a causa de la pandemia del coronavirus (Acosta y Cajas 2020, 27).

En un país que ha privatizado la política de liquidez monetaria, y que carece de herramientas contracíclicas, esta catástrofe mundial ha

¹² Los promotores de la dolarización han tenido mucho éxito en cultivar esta falacia. La dolarización y la reducción de la pobreza se correlacionan en el tiempo, durante una etapa en la que todos los indicadores económicos y sociales estuvieron afectados por el “efecto rebote” y por las “distorsiones causadas por la crisis financiera” (Acosta y Cajas Guijarro 2020, 25). Pero correlación no implica, necesariamente, causalidad.

incrementado la incertidumbre que siempre ha pendido sobre la dolarización. El horizonte de largo plazo es más sombrío, con la extracción de petróleo en declive, la certeza del fin de la era de los combustibles fósiles y la anacrónica opción de recuperar la extracción sobre la base de inversiones tóxicas en la Amazonía suroriental.

La dolarización se ha mantenido gracias a tres factores favorables a los resultados de corto plazo en la balanza de pagos: las remesas del más de millón de compatriotas que tuvieron que huir del país por la crisis bancaria de fines del siglo XX, el superciclo de los *commodities* y, a partir del agotamiento de este, el endeudamiento externo. El pavor de los políticos de turno a enfrentar una crisis que sería imposible de gestionar de forma ordenada, sin provocar una catástrofe social de consecuencias insospechables, también ha hecho lo suyo.

La dolarización se impuso de manera autoritaria, incluso en contra de la opinión del FMI. En una economía abierta y poco diversificada como la ecuatoriana, se podría especular que, tras dos décadas de bonanza para los empresarios importadores, ya sería tiempo de restablecer la política monetaria para compensar a los empresarios exportadores, recuperando la fácil ventaja de la competitividad espuria –y hasta algo de señoreaje–. En esta disyuntiva, el bienestar de los asalariados les importaría tanto como les importó en el año 2000, cuando el salvamento a los bancos quebrados y el *overshooting* cambiario empleado para transformar en dólares los sucres del Banco Central pulverizaron los salarios.

Tal vez el tema más importante para especular sobre las incertidumbres de la dolarización en tiempos de la “nueva normalidad” sea uno menos evidente: la estructura de los portafolios de los agentes económicos, que habría sido el factor definitorio a la hora de dar el salto al vacío. Hasta ahora, las alertas se han enfocado en el campo macroeconómico: incertidumbre, manejo de la liquidez interna, saldos comerciales, herramientas contracíclicas. Pero no se ha indagado la situación en la que se encuentran los portafolios de esa minoría –y sus expectativas– que sí tiene capacidad de incidir directamente en las decisiones de las autoridades económicas y de quienes legislan.

Sería iluso suponer que en el evento –siempre probable– de abandonar la dolarización, se recuperaría la relativa soberanía monetaria ejercida entre 1932 y 1999, para retornar a algo similar a la institucionalidad

legada al país por la Revolución Juliana. Marx (2004, 5) comienza *El 18 brumario de Luis Bonaparte* citando a Hegel: los grandes hechos y personajes de la historia aparecen dos veces, pero precisa que lo hacen “una vez como tragedia y otra como farsa”. De esta manera, grafica las diferencias históricas entre Luis Bonaparte y su tío, el inigualable Napoleón. A renglón seguido aclara que los “hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado” (5).

La historia no se repite, aunque aparente hacerlo. Las circunstancias del presente son diferentes a las de fines del siglo pasado. Desdolarizar no es algo simétricamente opuesto a dolarizar. En las dos décadas pasadas se ha presenciado un prolijo y sistemático esfuerzo para debilitar al Banco Central del Ecuador, entidad huérfana desde que la Constitución de 1998 le confirió la autonomía e independencia requeridas por el dogma neoliberal. El sistema financiero detenta, hoy, un poder político que jamás sospechó que podría alcanzar cuando en 1994 se promulgó la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (¿uno de los suyos, Guillermo Lasso, llegó a ser presidente de la República en 2021!). Siguiendo el razonamiento de Friedman con el que comienza este artículo, incluso cabría especular si Ecuador es hoy más o menos nación de lo que era en 1999.

Acosta y Cajas concluyen que, si “en algún momento es necesario superar la dolarización –o al menos *flexibilizarla*–, es necesario hacerlo en orden y, sobre todo, de forma democrática. Caso contrario, el saqueo y el trauma de 1999 podrían repetirse si los grupos de poder llegan a necesitarlos” (2020, 27). La economía política enseña que la probabilidad de que ocurra el “caso contrario” es abrumadoramente más alta que la de “superar” la dolarización en orden y democráticamente.

Referencias

Acosta, Alberto. 2000. “La trampa de la dolarización”. En *Dolarización: informe urgente*, editado por Alberto Acosta y José Juncosa, 9-46. Quito: FES-ILDIS / Abya-Yala / UPS (Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador).

- Acosta, Alberto. 2001. *Breve historia económica del Ecuador*. Quito: Corporación Editora Nacional.
- 2002a. “Ecuador: ¡La dolarización es una bomba de tiempo!”. En *Dolarización en el Ecuador: antecedentes, realidad y perspectivas*, 57-70. Guayaquil: Facultad de Ciencias Económicas Universidad de Guayaquil / FES-ILDIS.
- 2002b. “Dolarización y endeudamiento externo. ¿Un matrimonio por interés?”. En *Dolarización en el Ecuador: antecedentes, realidad y perspectivas*, 35-56. Guayaquil: Facultad de Ciencias Económicas Universidad de Guayaquil / FES-ILDIS.
- 2005. “El aporte de las remesas para la economía ecuatoriana”. Working Paper presentado en el Expert Group Meeting on International Migration and Development in Latin America and the Caribbean de las Naciones Unidas, México D. F., del 30 de noviembre al 2 de diciembre. <https://bit.ly/3uNY4QX>
- Acosta, Alberto, y John Cajas Guijarro 2020. “Ecuador... 20 años no es nada: a dos décadas del mito dolarizador”. *Revista Economía* 72 (115): 15-32.
- Acosta, Alberto, y Jürgen Schuldt. 2000. “¿Dolarización: vacuna para la hiperinflación?”. *Ecuador Debate*, 49: 25-41.
- Bustamante, Fernando. 2000. “¿Y después de la insurrección qué?”. *Ecuador Debate*, 49: 43-56.
- Cagan, Phillip. 1956. “The Monetary Dynamics of Hyperinflation”. En *Studies in Quantity Theory of Money*, editado por Milton Friedman, 23-117. Chicago: The University of Chicago Press.
- Cueva, Héctor de la. 2006. “El ALCA no pasó Una victoria de la Cumbre de los Pueblos”. *Observatorio Social de América Latina* 6 (18): 81-91.
- Dornbusch, Rudigier, y Stanley Fischer. 1987. *Macroeconomics*. Nueva York: McGraw-Hill.
- Echeverría, Julio. 2001. “Dolarización e institucionalidad política”. En *Macroeconomía y economía política en dolarización*, editado por Salvador Marconi, 17-24. Quito: Abya-Yala / UPS / FES-ILDIS / UASB.
- Enciso, Froylán. 2019. “Bases militares estadounidenses en América Latina (reseña)”. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 235: 625-630.

- Friedman, Milton. 1999 (2008). "Milton Friedman: Beware The Funny Money". *Forbes Magazine*, 22 de noviembre. <https://bit.ly/3jJEAGP>
- Klein, Naomi. 2008. *La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre*. Buenos Aires: Paidós.
- Lange, Carlos. 2010. "La doctrina del *shock*. El auge del capitalismo del desastre (comentario)". *Revista Invi*, 25: 225-227.
- Luque, Alberto. 2000. "Dolarización: el salto al vacío". En *Dolarización: Informe urgente*, editado por Alberto Acosta y José Juncosa, 113-156. Quito: FES-ILDIS / Abya-Yala / UPS.
- Marconi, Salvador. 2001. "A modo de introducción". En *Macroeconomía y economía política en dolarización*, editado por Salvador Marconi, 11-15. Quito: Abya-Yala / UPS / FES-ILDIS / UASB.
- Marx, Carlos. 2004. *El dieciocho brumario de Luis Bonaparte*. Rosario: Kolektivo Editorial "Último Recurso".
- Oleas-Montalvo, Julio. 2018. *Ecuador 1972-1999: del boom del petróleo a la pérdida del signo monetario*. Quito: Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
- 2020. "Ecuador: la economía política del feriado bancario (8-12 de marzo de 1999)". *Revista Uruguaya de Historia Económica* 10 (17): 49-67. <https://doi.org/10.47003/RUHE/10.17.03>
- Stilwell, Frank. 2019. "From Economics to Political Economy: Contradictions, Challenge, and Change". *American Journal of Economics and Sociology* 78 (1): 35-62. <https://doi.org/10.1111/ajes.12259>
- Thoumi, Francisco, y Merilee Grindle. 1992. *La política de la economía del ajuste: la actual experiencia ecuatoriana*. Quito: FLACSO Ecuador.
- Vargas, David. 2016. "Profecía autocumplida o los dos tiempos de la verdad". *Desde el Jardín de Freud. Revista de Psicoanálisis*, 16: 63-75.
- Williamson, John. 2004. *A Short History of the Washington Consensus*. Working Paper presentado en la conferencia "From the Washington Consensus towards a New Global Governance", Barcelona, del 24 al 25 de septiembre.